

CONGRESO NACIONAL

CAMARA DE SENADORES

SESIONES ORDINARIAS DE 2016

ANEXO AL ORDEN DEL DIA Nº 412

Impreso el día 4 de agosto de 2016

SUMARIO

COMISION DE JUSTICIA Y ASUNTOS PENALES Y DE
PRESUPUESTO Y HACIENDA

Dictamen en el mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo, sobre Fortalecimiento de los Tribunales Orales en lo Criminal Federal y en lo Penal Económico. (P.E. 15/16)

DICTAMEN DE COMISION

Honorable Senado:

Vuestras comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Presupuesto y Hacienda, han considerado el mensaje 554/16 del 04 de abril de 2016 y proyecto de ley de Fortalecimiento de los Tribunales Orales en lo Criminal Federal y de los Tribunales Orales en lo Penal Económico expediente 15/16; y, por las razones expuestas en el informe que se acompaña, se aconseja su rechazo.

De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del Reglamento del Honorable Senado, el presente dictamen pasa directamente a la orden del día.

Sala de la comisión, 02 de agosto de 2016

Anabel Fernández Sagasti.-

I N F O R M E

Honorable Senado:

El Poder Ejecutivo nacional ha enviado al Congreso de la Nación para su tratamiento, un proyecto de ley que pretende perseguir el fortalecimiento de la justicia de los Tribunales Orales en lo Criminal Federal y Tribunales Orales en lo Penal Económico a través de una implementación inconstitucional.

De la propuesta legislativa en tratamiento, se advierten los desaciertos e inexactitudes en que se incurren para alcanzar el fin invocado.

El fortalecimiento propuesto de nuestra justicia federal, se aleja de todas las previsiones legales para instrumentarla, violando lisa y llanamente las cláusulas de nuestra Constitución Nacional.

La justicia federal de la Capital Federal desarrolla su gestión a través de seis (6) Tribunales Orales Federales; por ley 26.632 se crearon el TOF N° 7-actualmente sin jueces y sin habilitación- y el TOF N° 8 con magistrados designados por decretos 1989, 1990 y 1991 del 24 de septiembre de 2015, sin habilitación jurisdiccional.

El proyecto de ley que nos ocupa, PE 15/16 “FORTALECIMIENTO DE LOS TRIBUNALES ORALES EN LO CRIMINAL FEDERAL Y DE LOS TRIBUNALES ORALES EN LO PENAL ECONOMICO propone:

- (I) La disolución de un Tribunal Oral en lo Criminal de la Capital Federal, con cuya dotación se integrará el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 8 de la Capital Federal.
- (II) Las transformación de un Tribunal Oral en lo Criminal de la Capital Federal en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 7 de la Capital Federal;
- (III) La transformación de cinco (5) Tribunales Orales en lo Criminal de la Capital Federal en cinco (5) Tribunales Orales en lo Criminal Federal de la Capital Federal.

La iniciativa delega en el Consejo de la Magistratura la individualización de los Tribunales Orales en lo Criminal de la Capital Federal que serán disueltos o transformados en Tribunales Orales en lo Criminal Federal de la Capital Federal, otorgándole la facultad de decisión a aquel de adoptar la por simple mayoría de sus miembros.

La facultad otorgada al Consejo de la Magistratura por el proyecto en tratamiento, viola las disposiciones de la Constitución Nacional, por las razones que seguidamente se exponen.

El artículo 99 de la Carta Magna estipula las atribuciones del Poder Ejecutivo, estableciendo en el inciso 4) que el Presidente de la Nación nombra a los jueces de los tribunales federales inferiores, en base a una propuesta vinculante en terna del Consejo de la Magistratura, con acuerdo del Senado.

Asimismo El Reglamento de Traslado de Jueces del Consejo de la Magistratura -Resolución 155/00- establece en su artículo 1^{ero} que “los magistrados del Poder Judicial de la Nación podrán solicitar su traslado a otro tribunal que se encuentre vacante siempre que:

a) No se haya resuelto la convocatoria a un concurso público de antecedentes y oposición para cubrir el cargo. Esta condición no regirá cuando se trate de un mismo tribunal colegiado;

b) La vacante a la que se solicita el traslado corresponda a la misma jurisdicción y tenga la misma competencia en materia y grado que el cargo que el juez ocupa. Este requisito no será exigido cuando el interesado haya obtenido un anterior acuerdo del Senado de la Nación para desempeñar la función a la que pide su pase”.

Luego, el artículo 51º determina que “si el Plenario aprobase el pedido de traslado, las actuaciones serán remitidas al Poder Ejecutivo Nacional, con la recomendación de que emita el decreto pertinente”.

La designación de un magistrado federal, por manda constitucional, exige la intervención de tres órganos: (I) el Consejo de la Magistratura que genera la terna de candidatos, previo concurso público; (ii) el Presidente de la Nación que opta de la terna propuesta y (iii) el Honorable Senado de la Nación, que concede el acuerdo a la designación.

Ese pedido de acuerdo que realiza el Poder Ejecutivo al Senado para la designación de jueces federales, debe precisar la indicación del Juzgado o Cámara donde se cubrirá la vacante.

Los magistrados de los tribunales orales criminales que por decisión del Consejo de la Magistratura serían designados jueces federales, tuvieron acuerdo del Senado, para ocupar el cargo en determinada competencia y especialidad. Se reitera que, no es facultad de aquel la designación de jueces –sino sólo proponerlos al PEN previo concurso de oposición y antecedentes- y luego de elevada la terna elevar el candidato propuesto al Senado de la Nación.

Es decir que, para dar acabado cumplimiento al mandato constitucional y las normas que lo reglamentan, deben crearse los tribunales federales por ley y designar a sus integrantes conforme las pautas establecidas por la Constitución Nacional.

Cabe destacar que en el fallo “Corrales, Guillermo y otro s/ habeas corpus” del 9 de diciembre de 2015, la Corte Suprema de la Nación dijo que “más allá de la innegable pertenencia al Poder Judicial de la Nación de los tribunales ordinarios de esta ciudad, la justicia nacional criminal no posee competencia en materia federal”.

Tras la sanción de la Constitución Nacional de CABA que otorgó las competencias propias de la ciudad, la Ley 24.588 de 1995 dispuso en su art. 8 que “la justicia nacional ordinaria de la ciudad de Buenos Aires mantendrá su actual jurisdicción y competencia continuando a cargo del Poder Judicial de la Nación”. En cuanto a esto la Corte valoró los antecedentes parlamentarios de la norma señalando que “el legislador tuvo el propósito de generar, gradualmente, un traspaso ordenado de distintas competencias nacionales a la órbita judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sin que, por esta razón, se altere la prestación correcta de la

administración de justicia tal como, posteriormente aconteció y quedó plasmado en los sucesivos convenios que sobrevinieron a aquella ley".

Por otra parte, el proyecto en tratamiento tampoco realiza las previsiones necesarias en cuanto a la infraestructura necesaria para el adecuado funcionamiento de los tribunales que se crean ni a la integración de fiscalías y defensorías para su actuación ante los nuevos tribunales orales federales que se crean.

En el nuevo esquema propuesto sería necesaria la creación por ley de nuevas Fiscalías, las que deberían integrarse conforme el régimen de concursos y con acuerdo del Senado.

Otra de las propuestas que sostiene la iniciativa son las modificaciones al Código Procesal Penal de la Nación, aprobado por Ley 23.984 y sus modificatorias, cuando se encuentra pendiente la entrada en vigencia de la ley 27.063, suspendida inconstitucionalmente por el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 257/2015.

Por las razones expuestas, se propone el rechazo del presente proyecto de ley.

Anabel Fernández Sagasti.-